

Tierra sin prejuicios

Perry Anderson

Perry Anderson (1938) es historiador y pensador político británico, editor durante muchos años de la *New Left Review* y profesor de Historia y Sociología en la Universidad de California en Los Angeles. Entre sus libros traducidos recientemente se cuentan *Los fines de la historia* (1996), *Campos de batalla* (1998) y *Los orígenes de la postmodernidad* (2000), todos ellos publicado por la editorial Anagrama. El presente artículo apareció originalmente en la *London Review of Books* (vol. 24, núm. 6, 2002). www.lrb.co.uk

Italia ha ocupado durante mucho tiempo una posición peculiar en el concierto de Europa. Por riqueza y población se alinea junto con Francia, Gran Bretaña y Alemania, en el grupo de los cuatro estados líderes de la Unión. Pero nunca ha jugado un papel comparable al de esos otros países en los asuntos del continente, y pocas veces ha sido contemplado como socio diplomático o rival demasiado significativo. Nunca asociamos su imagen a la del poder. Históricamente, sin duda, ésa ha sido una de las razones por las que viene siendo el país favorito de los extranjeros. Alemanes, franceses e ingleses han expresado repetidamente un cálido afecto por Italia que casi nunca han sentido entre ellos, aunque su objeto de admiración es diferente en cada caso. Pocos de sus comentarios dejan de tener alguna resonancia actual. Escapando de las mojigaterías de Weimar, en Roma Goethe encontró «moralmente saludable vivir entre gente sensual». En Italia, Byron decidió que allí no había «ninguna clase de ley ni de gobierno, y es maravilloso lo bien que las cosas funcionan sin ellos». Stendhal, mejor conocedor del país, sentía a veces que «sólo la música está viva en Italia, y todo lo que hay que hacer en este precioso país es amar; los otros placeres del alma se echan a perder; uno muere envenenado de melancolía como ciudadano». Sin embargo, paradójicamente, también considera a los italianos maestros en otras prácticas:

Nunca, fuera de Italia, podría nadie intentar ese arte llamado política (manera de hacer que los otros actúen como uno desea, cuando la fuerza o el dinero no están al alcance) Sin paciencia, sin ausencia de ira, nadie puede ser llamado político. Napoleón fue realmente pequeño en este aspecto, tenía suficiente sangre italiana en sus venas para ser sutil, pero era incapaz de usarla.

La lista de citas favorables de este tenor podría prolongarse indefinidamente.

Diametralmente opuestos son, en cambio, los comentarios de los propios nativos. La mayoría de lenguas tienen alguna locución autocrítica, normalmente un juego de palabras o un neologismo, para indicar los típicos defectos nacionales. Los alemanes suelen citar la desdeñosa descripción hegeliana de la política de identidad local, *Deutschdumm*; los franceses deploran la fanfarrona *franchouillardise*; los peruanos llaman *peruanada* a un enredo irremediable; los brasileños se burlan a veces de una *brasileirice*. A Inglaterra parecen haberle faltado tales reflejos autoirónicos: «Englishry» –regalo de Tom Nairn, un escocés– no se utiliza en su tierra de referencia. Italia se encuentra en el polo opuesto. En ningún otro lugar es tan múltiple y se utiliza tanto el vocabulario de burla de uno mismo. Califican de *Italietta* la fútil frivolidad del país; *italico* –antaño favorecido por la ampulosidad fascista– ahora es sinónimo de actitud vana y de cinismo encubierto; y la más mordaz de todas, *italiota*, es distintivo de un cretinismo invencible. Lo cierto es que son términos del lenguaje público, más que del discurso popular. Pero, tal y como demuestra la frase *all'italiana* (divorcio, etc.), la falta de autoestima que expresan es generalizada. La buena opinión que tienen los demás de ellos es extraña a los propios italianos.

En años recientes, la tradicional desafección a la que hacemos referencia ha pasado a ser un eslogan político insistente. Desde finales de los ochenta, y con un *crescendo* en los noventa, el grito era que Italia debía, de una vez por todas, convertirse en «un país normal». Así rezaba el título del manifiesto que lanzó en 1995 el líder del entonces Partido Comunista Italiano: *Un paese normale*. Pero la frase era un leitmotiv de discursos y artículos de todo el espectro, y sigue siendo un estribillo

recurrente en los medios hasta hoy mismo. El mensaje es que Italia debe llegar a ser como los demás países occidentales. La «normalidad» a la que alude implica, como pasa siempre, algo más que un simple estándar de lo que es típico. Lo que no es «típico» puede ser excepcional, y por lo tanto mejor; pero lo que no es «normal» es infaliblemente peor que ello –anormal o subnormal–. El llamamiento a que Italia se convierta en un país normal expresa un deseo de parecerse a otros que son superiores.

La lista completa de anomalías que sitúan a Italia en un bando distinto difiere según los análisis, pero todos subrayan tres características centrales. Durante cuarenta años de continua hegemonía cristianodemócrata no hubo alternancia real en el gobierno. Bajo ese régimen, la corrupción política llegó a proporciones colosales. Entrelazada con él, la delincuencia organizada se convirtió en un poder fáctico en el país a medida que las actividades de la mafia fueron extendiéndose de Sicilia hacia Roma y el norte. Suelen destacarse otras limitaciones nacionales: la ineficacia de la administración, la falta de respeto por la ley, el escaso patriotismo. Pero en la convicción generalizada según la cual Italia no es un país normal, el inmovilismo del Gobierno, la corrupción omnipresente y el crimen militarizado han tenido un lugar privilegiado. Para un análisis cuidadoso y equilibrado de todos esos factores, no hay mejor estudio que el de Paul Ginsborg, *Italy and Its Discontents*, obra de un historiador inglés en Florencia, originalmente publicado en italiano, que es el último monumento de admiración crítica hacia el país elaborado por un investigador foráneo.

La estancia prolongada en el gobierno no es una peculiaridad exclusiva de Italia. La socialdemocracia sueca ha estado en el poder más de cuarenta años seguidos, y la coalición austríaca de socialdemócratas y cristianodemócratas casi lo mismo; el gobierno suizo es virtualmente inamovible. Lejos de resentirse por ello, estas sociedades son habitualmente consideradas entre las mejor administradas de Europa. La corrupción política japonesa ha sido mucho mayor que la italiana; por su parte, franceses y alemanes no van a la zaga. La mafia sí que es algo *sui generis* de Sicilia, pero con modalidades menos etnográficas tiene equivalentes en la mayor parte de Europa oriental, siendo el caso más llamativo el de Rusia. Irlanda del Norte, el País Vasco y Córcega nos recuerdan que en la propia Europa occidental más de una periferia regional sigue acosada por una violencia endémica, aunque los problemas del *Mezzogiorno* de Italia sean, ciertamente, de otro calibre. Habría que hacer muchas distinciones de todo tipo si nuestra finalidad fuera un análisis comparativo digno de tal nombre, pero en todo caso se puede decir que no es ninguna de esas patologías, por sí solas, las que hacen a Italia anormal, sino más bien una fatal combinación de todas ellas, que no se encuentra en ningún otro lugar.

De todas maneras, si una idea fija echa raíces en una sociedad, es poco probable que haya surgido de la nada. En Italia, la fascinación por los modelos de fuera –el deseo de emular a un mundo más avanzado– fue alimentada por la tardía unificación del país, y resultó de la debilidad del Estado nacional. El gusto piemontés por el sistema de prefecturas francés, impuesto a

Portada de «Der Spiegel»,
(1977)

Anuncios en la revista
«Esquire», (1953)



toda la península sin tener en cuenta las identidades regionales, fue un ejemplo temprano de ello; un poco más tarde, la admiración de Crispi por Alemania como poder imperial fue un paso más. En este sentido, la ansiosa mirada hacia el exterior en busca de instituciones que imitar, tan pronunciada en los últimos años, tiene hondas raíces históricas: se trata de la reaparición de un tema recurrente. La versiones contemporáneas, además, se ven reforzadas por la triste experiencia del único período en que Italia no siguió ningún modelo externo, sino que, dando origen

al fascismo, fue pionera de una gran innovación política que se extendió a otros estados. Para muchos, desde entonces, las invenciones puramente italianas parecían malditas: mejor volver a la seguridad de la imitación. En la década de 1980, la manera en que la Democracia Cristiana llegó a ser imaginada por la oposición la situaba en el desastroso modelo alternativo de la singularidad nacional. Era la «Balena Bianca», una aberración de la naturaleza, semejante al asesino animal marino de Melville. De acuerdo con la leyenda, el golpe de arpón final a la bestia daría lugar a la Segunda República.

Porque así es como los italianos suelen calificar al actual orden político. Según esta versión, la Primera República que emergió al final de la guerra se desplomó, en medio de dramáticas convulsiones, a principios de los noventa. De su desaparición ha surgido una configuración más moderna, todavía incompleta, pero que ya constituye una mejora capital con respecto a su predecesora. La realización plena de la Segunda República, aún lejos de producirse, es lo que hará finalmente a Italia un país normal. Así es como se interpreta oficialmente lo sucedido en la década anterior, y se trata de una interpretación ampliamente compartida. También en este caso el trasfondo es un paradigma foráneo. El paso de la Primera a la Segunda República en Italia se concibe por analogía como la transición de la Cuarta a la Quinta República en Francia. Los regímenes que aparecieron en ambos países después de 1945 tenían, al fin y al cabo, semejanzas sorprendentes: rápido crecimiento económico, fuerte polarización ideológica, grandes partidos de masas, cambios de gabinete constantes con poco o ningún cambio de dirección política, descrédito creciente de la clase gobernante e incapacidad para controlar crisis violentas de la periferia mediterránea.

En ambos casos, el contexto internacional influyó en la caída de la vieja República: el final del colonialismo europeo en el caso de Francia y el final de la guerra fría en el caso de Italia. La Liga Lombarda de Umberto Bossi, el martillo que debilitó los puntales del tradicional sistema de par-



ITALY'S CLASSIC TASTE

Table settings of stainless steel, designed by craftsmen Gio Ponti and imported by Bonocori, New York City

Table by M. Singer and Sons, of New York City, water-back chair from Sabotini, N. Y. C., the table to match from Vitale Barba and Giffi, N. Y. C.

Hand blown, 24-inch wide diameter of amber glass with a pyramidal top, at the Penhouse Gallery, N. Y. C.

ENQUIRE • January



- 1 | Rome Was Never Like This in history was
- 2 | Ever Creative Italy
- 3 | On the Black and Gold Standard
- 4 | Roman Holiday: Sportswear
- 5 | Italy's Classic Taste
- 6 | The Flavor of Italy



The beretted, balanced Beretta Grade 100 over-and-under design, with hand-engraved action, chambered stock, forepiece, from Abbramante & Pich, N.Y.C.

EVER CREATIVE ITALY

Italy is back again, too, with the old craft which fashioned a sword or a pike with a firmness that created a legend in the old world. Today's great challenge of the functional has been met head-on in Italy's automobile, the many little scooters that ply her streets, and the hard kind of ware that men enjoy having done well. A showcase of what is new to hand in Italian shows would be a joyful array, and Esquire's scooters were hard put to being together within the limits of the printed page a group that would suggest the spirit of the rapidly designed merchandise that is appearing on all sides.

But take the items on these pages. In each one of them, the hand of the craftsman has given that little extra twist that changes a mechanical device from an impersonal machine to a possession of original charm. Every man likes to think of his gun as something special. The Beretta is something special, a beautiful blend of balance, smooth action, graceful design. The Olivetti

typewriter is typical of a concern whose very factory is a monument to modernity. The Ferrari speaks for itself—low, sleek, and fast, very much the product of men who think in terms of fast road runs and the sheer pleasure of driving a machine with a personality. The tandem novelty is the added touch to the economy of the Lambretta motor scooter. The job is one of the really tempting items that American tourists are finding difficult to resist: Rome's streets are alive with scooters and the boys seem to exude a peculiar kind of pride in their own, as if testing through a hole in leather while the big boys wait were as much fun as a quarterback study for a long run in the Rose Bowl. Every one of the items has that little extra quality, the quality that makes it old-world Italian in craftsmanship and new-world Italian in mechanical excellence—proof that a nation can make the switch from art to mechanics and come up with a happy combination of the two. 80

Letters 22 combine light weight with typing ease, from Olivetti, New York

Two-stroke Lambretta motor scooter goes 50 m.p.h., costs \$1198 on our gallon, from Bucker & Smith, New York

ENQUIRE • January

81

tidos italiano, tiene incluso un precursor pequeño-burgués en el movimiento de Pierre Poujade, el surgimiento del cual aceleró la crisis final de la Cuarta República. En todos estos aspectos, la referencia francesa parecería más apropiada a la situación italiana de principios de los noventa, ya que legitimaba las esperanzas de una catártica purga de los males acumulados del viejo orden y de una reconstrucción del estado sobre bases más sanas. La tarea del momento era emular el logro histórico de De Gaulle cuando fundó una Quinta República estable. Pero ¿quién podía ser el equivalente italiano en un escenario así?

En abril de 1992 la coalición gobernante –dominada desde 1980 por Giulio Andreotti, el jorobado «Belcebú» de la Democracia Cristiana, y Bettino Craxi, el jefe taurino de los socialistas– había vuelto una vez más al poder tras las elecciones. El movimiento de Bossi, un reciente intruso en el sistema de partidos, había avanzado sorprendentemente en el norte, pero no lo suficiente como para afectar los resultados nacionales. Parecía que todo iba a continuar igual que siempre. Sin embargo, un mes más tarde los magistrados de Milán emitieron las primeras advertencias oficiales, *avvisi di garanzia*, a los líderes de los dos partidos dominantes: estaban siendo investigados por corrupción. Casi simultáneamente, la caravana de Giovanni Falcone, el juez que se había convertido en símbolo de la determinación de extirpar la mafia de Sicilia, fue objeto de un atentado mortal en las afueras de Palermo. Bajo el impacto de estos dos tremendos rayos, el viejo orden se desintegró súbitamente. En los meses que siguieron, los magistrados milaneses desataron una tempestad de investigaciones contra la clase política y sus socios en los negocios, bautizada por la prensa como la *Tangentopolis*. En poco más de un año Craxi se había trasladado a Túnez y Andreotti había sido imputado como cómplice de la mafia. Para el otoño de 1993, más de la mitad de los miembros del Senado y de la Cámara de los Diputados habían recibido avisos de estar bajo sospecha de corrupción (sospechas que eran tomadas por la opinión pública como pruebas de culpabilidad) y tras un referéndum fue abrogado el sistema de representación proporcional por el que habían sido elegidos. Este torbellino barrió a los gobernantes tradicionales de Italia. En la primavera de 1994 la Democracia Cristiana y el Partido Socialista se habían desvanecido. Sus socios menores se eclipsaron también.

Sólo uno de los partidos grandes salió indemne del naufragio. El candidato lógico para el papel de renovador parecía encontrarse entre los herederos del comunismo italiano, recientemente remodelado como Partido Democrático de la Izquierda (PDS). Tal como había pasado con el gaullismo en Francia, en Italia los comunistas habían quedado excluidos de la estabilización del régimen posterior a 1945, formando una oposición a la espera, con una masa de seguidores, cosa que les permitió que la degeneración del sistema no les descreditara. Como De Gaulle en 1958, el PDS en 1992-1993 no era responsable de la caída del viejo orden y de la misma manera que aquél utilizó la «rebelión de los coroneles» en Argelia, que no había instigado, para llegar al poder en París, el PDS se dio cuenta de que podía utilizar el asalto de los magistrados a la *Tangentopolis*, con el que no tenía conexión, para forzar la apertura de las puertas del poder en Roma, cerradas para él desde 1947. Para la construcción de la Quinta República, De Gaulle atrajo a una heteróclita gama de aliados –Antoine Pinay, Guy Mollet y otros extraños compañeros de cama formaron parte de su primera coalición y le ayudaron a fraguar la nueva Constitución, antes de que se deshiciese de ellos. Lo mismo ocurrió con el PDS, que se equipó con una abigarrada formación de outsiders y oportunistas –el notable autopropuesto Segni, de la Democracia Cristiana; el francotirador radical Pannella; el todavía líder fascista Fini– para promover el referéndum de 1993 que socavó el sistema electoral proporcional en el que se había basado la Primera República.

Aquí, sin embargo, acaba la analogía. Una vez instalado en París, De Gaulle se puso firmemente al frente de la reorganización del sistema político francés, controlando todas las iniciativas,



GENOVESE



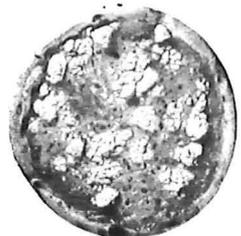
TIROLESE



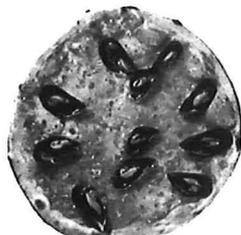
PUGLIESE



CAPRICCIOSA



ROMANA



TARANTINA



TEDESCA

escogiendo escrupulosamente los simpatizantes de los que quería rodearse, mientras se dedicaba a reconstruir el Estado. El PDS, en cambio, se subió al carro del populismo del referéndum impulsado por Segni, prestándole capacidad de movilización de masas, pero no dirección política. El contraste apunta a una diferencia de mayor calado. A pesar del paralelismo, los herederos del comunismo italiano estaban en una posición mucho más débil que De Gaulle. Excluido del Gobierno de Roma casi al mismo tiempo que el general se retiró a Colombey-les-Deux-Eglises –en 1947– el PCI no mantuvo, sin embargo, la misma distancia intransigente con el sistema político de la Primera República que De Gaulle mantuvo con la Cuarta. En los años ochenta el PCI hacía ya tiempo que se había convertido en un semi-partícipe a nivel regional en Italia, formando parte de diversas coaliciones políticas provinciales, y en un socio tácito de la Democracia Cristiana a nivel nacional, donde la mayor parte de las iniciativas legislativas se aprobaban con su consentimiento. Por lo tanto, también él estaba, en cierto modo, implicado en las típicas prácticas de *sottogoverno* –comisiones en contratos de obras públicas, subvenciones a organizaciones afines, residencias para notables del partido– que habían marcado al viejo orden. Cuando sobrevino la crisis, era arriesgado para el PDS presentarse demasiado agresivamente como campeón de un gobierno limpio.

Una dificultad mayor radicaba en la evolución general del PCI desde la guerra. El partido había recibido una gran herencia intelectual de Antonio Gramsci, cuyos *Cuadernos de la cárcel* se publicaron por primera vez en 1948. A partir de aquí, con los elementos de distorsión o selección táctica que se quiera, el PCI creó una cultura política de masas sin equivalente en la izquierda europea. En Italia ningún otro partido tenía un patrimonio comparable –la originalidad de las ideas de Gramsci no sólo era ampliamente aceptada en el país, sino cada vez más reconocida en el extranjero desde los años sesenta. Ahí radicaba, pues, una tradición puramente italiana, innegablemente vital y sin hipotecas. Pero el PCI de los tiempos de Togliatti –desde mediados de los cuarenta a mediados de los sesenta– no era sólo un producto autóctono. Era un componente de un movimiento disciplinado internacional, dirigido por la URSS. Después de la guerra, su estrategia fue por sus propios motivos –aunque en todo caso en línea con los deseos de Moscú– coherentemente moderada y, con el tiempo, el partido fue independizándose cada vez más de los cálculos de la diplomacia soviética. Pero en cuanto a su estructura interna no dejaba de ser una organización estalinista, todavía asociada externamente con Rusia. Ante el desafío de los estallidos de radicalismo estudiantil y obrero de finales de los sesenta, que divergían totalmente de su horizonte estrictamente parlamentario, el PCI reaccionó purgando a los disidentes más vivaces de sus propias filas, como el valioso grupo de *Il Manifesto*, y poniendo cada vez más sus esperanzas en un pacto con la Democracia Cristiana para gobernar conjuntamente el país: lo que se llamó el Compromiso Histórico.

Sin embargo, la conexión soviética no fue abandonada. Como suele ocurrir, el líder más derechista del PCI, el formidable Giorgio Amendola, que exhortaba abiertamente al partido a convertirse en una versión italiana del laborismo británico, era también el más apegado a ella, y pasaba habitualmente sus vacaciones en Bulgaria. Cuando los cristianodemócratas rehusaron la mano tendida de los comunistas a mediados de los setenta, prefiriendo en cambio a los socialistas como socios más flexibles, la dirección del PCI empezó a desvincularse más abiertamente de Moscú. Pero después de años de prudencia, de la única manera que podía pensar en hacerlo era virar hacia el polo opuesto, Washington. Así, su último auténtico líder, Enrico Berlinguer, declaró que el partido se sentía más seguro bajo la protección de la OTAN. Sus admiradores de los medios de comunicación le aplaudieron, pero no ganó mayor credibilidad electoral. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, los nuevos dirigentes se deshicieron apresuradamente del nombre del partido y pronto empezaron a repu-

diar gran parte de su pasado. De Gaulle, que había sido el más destacado imperialista francés de los años cuarenta, salió indemne del colapso del imperio colonial francés en los sesenta, negociando diestramente la independencia de Argelia en razón de los supremos intereses de la nación. El rebautizado PDS, tras abandonar su herencia por un tibio potaje ideológico, no parecía representar ya ninguna tradición específicamente italiana, y no mereció el respeto de los electores por este sacrificio de las ideas. En los comicios de 1992, en vísperas de la crisis nacional, su voto se hundió en un nefasto récord: el 16,5%, es decir, menos de la mitad del resultado de quince años antes.

Aun así, a finales de 1993 el panorama político había quedado tan segado de rivales u oponentes que el partido parecía al borde del poder, aunque sólo fuera por la eliminación de las alternativas. Una coalición construida alrededor del PDS acababa de obtener las alcaldías de Roma, Nápoles, Venecia, Trieste y Palermo. Estaba en vigor la nueva normativa electoral, a cuyo diseño había contribuido, y de acuerdo con ella la mayor parte de escaños parlamentarios serían decididos según el sistema de mayoría relativa. La izquierda parecía bien situada para su primera victoria después de la guerra. En lugar de eso, sin embargo, apareció algo así como un ladrón salido de las sombras. La última semana de enero de 1994, Silvio Berlusconi, propietario del mayor imperio mediático de Italia, anunció que encabezaría un «Polo de las Libertades» para salvar al país de las garras del cartel formado por el PDS. En pocos días lanzó un movimiento político que recibió su nombre del grito de los hinchas de la selección nacional de fútbol –Forza Italia– y que fue organizado por los ejecutivos de su holding Fininvest, y forjó alianzas con la Liga de Bossi en el Norte y con la Alleanza Nazionale de Fini en el sur, para formar un frente común contra el peligro de un Gobierno rojo. Dos meses después el Polo arrasó, haciéndose con el poder por una clara mayoría. La izquierda italiana había sufrido una rápida y completa derrota táctica en la competición por ser abanderar la Segunda República, ante una coalición de derechas.

A la vista de los discursos que surgían de todas partes a favor de hacer borrón y cuenta nueva en términos políticos, este resultado respondía en cierta manera a una lógica irónica. Berlusconi, Bossi y Fini eran fuerzas inéditas en la escena política italiana, mientras que el PDS y muchos de sus miembros, algunos de ellos elementos fijos de la Primera República, no lo eran. Económicamente, Berlusconi debía su fortuna a favores recibidos del viejo orden. Genealógicamente, Fini provenía de la tradición fascista leal a la República de Salò. Pero como actores políticos de primera fila estaban por estrenar y por eso mismo podían proyectar más fácilmente un aura de novedad. Bossi, por su parte, era el gran y genuino intruso de finales de los ochenta y principios de los noventa. Berlusconi realizó una notable hazaña al conseguir concertar, casi de la noche a la mañana, fuerzas tan dispares. La Lega de Bossi, cuya base social estaba integrada por pequeños industriales y comerciantes de pueblos y ciudades del norte, era totalmente hostil a la burocracia romana y al clientelismo meridional, que constituían en cambio los baluartes de la Alleanza de Fini. Mientras el primero abogaba por una devolución radical de poder y por la desregulación, el segundo era un gran defensor de la protección social y del centralismo estatista: ambos se detestaban.

Forza Italia, el primer partido del mundo organizado como una empresa, habría sido imposible sin la fortuna personal de Berlusconi y su control de las televisiones. Pero la clave de su éxito político radicó en su habilidad para mediar entre Bossi y Fini hasta convertirlos en aliados en los flancos, cada uno en un extremo de la península donde no competían el uno con el otro. La izquierda perdió porque no demostró una capacidad de agregación comparable. La coalición de derechas se llevó el 43% del voto; la izquierda el 34%; lo que había quedado del centro católico –más cercano en concepción política a la segunda que a la primera– el 16 %. Un sistema de representación pro-

porcional habría dado lugar a un Gobierno de centro-izquierda. Pero con el sistema de mayoría relativa, atemperado sólo por un elemento residual de proporcionalidad, el hecho de que no se constituyese un bloque electoral entre izquierda y centro provocó la derrota de ambos. Con el apoyo al referéndum de Segni, al PDS le había salido el tiro por la culata.

Desposeída de la victoria en el último minuto, la izquierda no encajó bien la derrota ¿Cómo podía el pueblo italiano haber votado a una figura tan siniestra como Berlusconi? La consternación no fue privativa del PDS y su área de influencia, sino que se extendió también en amplios sectores del *establishment* italiano: los industriales Agnelli, patrón de la Fiat, y De Benedetti, de la Olivetti, ambos con influentes portavoces en la prensa, especialmente en *La Stampa* y *La Repubblica*; Scalfaro, el presidente de la República; tecnócratas del Banco Central; muchos magistrados y la mayoría de los intelectuales; la opinión católica ilustrada. En el extranjero, el *Financial Times* y *The Economist* desaprobaban a Berlusconi desde el primer momento y no han cejado hasta hoy. Así que la izquierda tuvo una amplia caja de resonancia cuando, después de la sorpresa inicial de su revés de marzo de 1994, empezó a lanzar agrios ataques a la legitimidad del nuevo primer ministro italiano. Se le podían formular dos acusaciones fundamentales relacionadas entre sí. El control que Berlusconi detentaba sobre la mayor parte de las televisiones privadas, por no hablar de la prensa y del mercado editorial, era incompatible con el ejercicio del alto cargo público que ostentaba —porque conducía, no sólo a conflictos evidentes de intereses económicos, sino que podía violar la separación de poderes esencial para cualquier democracia. Además, había buenas razones para sospechar que había amasado la extraordinaria fortuna que le había permitido construir su imperio mediático valiéndose de todo tipo de corrupciones. Pese a una propaganda que defendía lo contrario, el nuevo gobernante del país representaba lo peor del viejo orden: una combinación de deshonestidad e ilegalidad que constituía un peligro inminente para cualquier sociedad libre. En términos generales, ésta es todavía la visión que prevalece de Berlusconi en el extranjero.

Poco se puede objetar, sin embargo, respecto a su valía personal en el terreno de los hechos. Hijo de un modesto empleado de banca, Berlusconi hizo su primera fortuna como promotor inmobiliario en la periferia de Milán, movilizando recursos de insondable origen para lanzar proyectos de construcción a finales de los sesenta, antes de dedicarse a la televisión comercial a mediados de los setenta. Milán era feudo político de Craxi, el hombre fuerte del PSI, que estaba firmemente decidido a quebrar la primacía que ostentaban los cristianodemócratas en el poder y las prebendas de los altos niveles del Estado italiano. La DC se había valido ampliamente de la corrupción para financiar su maquinaria, pero su fuerza política provenía de su base de masas como partido católico ligado a la Iglesia. El PSI, que carecía de raíces comparables en la sociedad, se vio obligado a recurrir más ampliamente a la extorsión para compensar su déficit popular, y a base de competir cada vez más por el botín, se alzaron sobremanera las apuestas del juego de la corrupción. Con Craxi, una generación de agitadores callejeros se había abierto paso hasta la cima a toda costa, bregando por el control del PSI y liquidando a los viejos líderes y tradiciones del partido. Mientras, sus equivalentes del PCI fueron ascendiendo, a base de obediencia y conformidad, dentro de una burocracia que premiaba la precaución, la falta de alardes y el anonimato. Hábil en las maniobras rápidas y los giros tácticos inesperados, el grupo dirigente del PSI demostraba a menudo una capacidad de iniciativa política que dejaba en evidencia a un PCI siempre a la defensiva y que parecía poco convincente. Sin embargo, era una máquina que requería una permanente lubricación financiera. Cuando Craxi consiguió su objetivo de convertirse en presidente del gobierno, el boom especulativo de mediados de los ochenta fomentaba un clima de consumo ostentoso en el que la anterior moderación de la clase política se

estaba disolviendo. El PSI daba ahora el tono en el gobierno, mientras la DC le seguía de cerca. En 1987 el «supersoborno» que se repartió entre los partidos gobernantes, y sólo por la creación del complejo petroquímico Enimont, ascendió a 100 millones de dólares.

La carrera de Berlusconi se ajustó a este cambio estructural de las décadas finales de la Primera República. Si sus primeras conexiones fueron con el ala derecha de la Democracia Cristiana –uno de sus apoyos clave estaba relacionado con la mafia siciliana–, cuando entró en el negocio televisivo trabó una estrecha amistad con Craxi, quien fue padrino de uno de sus hijos y testigo en las segundas nupcias del magnate. A medida que el PSI pasaba a compartir el poder con la DC en el sistema político, el imperio televisivo de Berlusconi crecía. Cuando Craxi se convirtió en primer ministro en 1983, Berlusconi controlaba ya –desafiando al Tribunal Constitucional– dos cadenas de ámbito nacional. Cuando Berlusconi adquirió la tercera, los magistrados del alto tribunal se vieron obligados a intervenir y, una noche de octubre de 1984, suspendieron las emisiones de las tres. Inmediatamente Craxi promulgó un decreto que las autorizaba a proseguir las emisiones, y cuando el Parlamento lo declaró inconstitucional, forzó una ley que temporalmente convalidaba su decisión. Seis años más tarde Andreotti, presionado por el PSI, hizo aprobar en el Parlamento una legislación específica hecha a medida para ratificar el control que Berlusconi ejercía sobre el ochenta por ciento de la televisión comercial del país –la llamada Legge Mammi–, lo que le costó un voto de confianza que dividió a su propio partido. Obviamente, es poco probable que todos esos extraordinarios favores de estado fueran otorgados a un hombre de negocios particular sin pedir nada a cambio.

Con el tiempo el imperio de Berlusconi englobaría no sólo las cadenas de televisión y una muy lucrativa agencia de publicidad, sino también algunas de las más prestigiosas editoriales italianas, la cadena de supermercados más popular y uno de los clubes de fútbol más exitosos del país. Pero desde el principio Berlusconi tuvo siempre otra cara, más parecida, en cuanto a imagen de sí mismo, a Reagan que a Murdoch. De joven fue cantante melódico en barcos de crucero por el Adriático y en salas de baile de Milán, gorjeando ante el micrófono al lado de Fedele Confalonieri –que después sería alto ejecutivo de Fininvest–, que hacía tintinear un piano blanco. No sólo quería acumular compañías y dominar mercados, sino también encantar e impresionar a la audiencia. El presumido Berlusconi –hay incluso un toque algo ingenuo de sinvergüenza en su impecable cara y su sonrisa de oreja a oreja– siempre ha buscado el *glamour* y la popularidad, atributos más propios del escenario que de la sala de juntas. El toque personal de su discurso es la *barzelletta* –el tipo de «historia divertida» de las que Reagan tenía una colección, aunque quizá sean menos coloristas. Esa vulgaridad no es la última de las razones por las que Berlusconi es tan detestado por muchos italianos. Pero esa es la cultura de sus cadenas televisivas, con sus audiencias populacheras, y no representó obstáculo alguno cuando entró en política. Quizá los más cultos sintieron escalofríos cuando se convirtió en presidente, pero un gran número de votantes sintonizaba con su estilo.

Una vez en el cargo, sin embargo, su falta de experiencia política quedó pronto demostrada. En vez de exhibir tendencias resueltas y autocráticas, se mostró curiosamente dubitativo e indeciso, echándose en seguida atrás cuando sus primeras iniciativas –intentos de amnistía para los delitos de la *Tangentopoli* y recortes de pensiones– encontraron una fuerte oposición. En todo caso, su mandato fue breve. En los meses anteriores a las elecciones, los magistrados de Milán habían empezado a investigar a toda una serie de destacados industriales italianos como, entre otros, los directivos de Fiat, Olivetti o Ferruzzi, pero no habían alcanzado todavía a Berlusconi.

Cuando se convirtió en presidente del gobierno, pusieron la directa. El equipo de magistrados de Milán, el pelotón de *Mani Pulite*, las «Manos Limpias» que habían sacado a la luz la *Tangentopolis*, no era una fuerza neutral o apolítica. Los jueces y fiscales italianos –una peculiaridad del sistema es que no hay división de carrera entre ellos– son un estamento muy politizado en el que la afiliación tácita a algún partido y la existencia de asociaciones profesionales opuestas se dan por sentadas. Los magistrados milaneses no eran en absoluto ideológicamente homogéneos –un miembro destacado era afín al PDS y otro a la AN de Fini– pero sí que coincidían en su hostilidad hacia la venalidad de la Primera República. El desengaño en las filas de la izquierda ante el modo en que Berlusconi había usurpado la promesa de una democracia más limpia no fue nada comparado con el disgusto de los jueces milaneses. A finales de noviembre una llamada de teléfono del magistrado jefe de Milán advirtió a Scalfaro, presidente de la República, que estaba a punto de ser emitido un *avviso di garanzia* que afectaba al primer ministro por sospechas de corrupción. Berlusconi estaba, en ese momento, preparándose para salir hacia Nápoles, donde iba a presidir una Conferencia de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Crimen Organizado. Al día siguiente le comunicaron la humillante noticia en plena sesión.

En medio del jaleo que se armó, se urdió una trampa política. Después de la derrota sufrida en primavera, el PDS tenía un nuevo líder. De poco más de cuarenta años y con un estilo que se asemejaba al de la joven guardia del PSI de la época de Craxi, Massimo D'Alema era más ducho en el arte de la emboscada y del viraje rápido que sus lentos compañeros del PCI. Detrás de las bambalinas, había estado trabajándose a Bossi, alimentando sus celos personales hacia Berlusconi, que había eclipsado su revuelta contra el viejo orden, y estimulando en él también el resentimiento de clase del matón hacia el magnate. En diciembre D'Alema consiguió su propósito. La Lega, que detentaba un tercio de los escaños de la coalición gobernante, anunció de improviso que abandonaba el Gobierno. Berlusconi perdía así la mayoría y se vio forzado a dimitir. El primer Gobierno de la Segunda República había durado apenas nueve meses –menos incluso que el promedio de los de la Primera República–.

De acuerdo con la doctrina a la que ahora se adherían ciegamente todos los grandes partidos, la transparencia política exigía la convocatoria de nuevas elecciones. Desde 1992 ningún vicio de la Primera República había sido tan unánimemente deplorado como la práctica de los cambios constantes de alianzas en el Parlamento para formar nuevos gabinetes sin tener en cuenta el consentimiento de los votantes. En la Segunda República, rezaba esta doctrina, los votantes que depositaban su papeleta podían estar seguros de que sus intenciones no serían tergiversadas por inversiones de alianzas de tipo oportunista en la Cámara de los Diputados. Bossi debía la mayor parte de su representación parlamentaria a votantes que habían elegido al Polo más que estrictamente a la Lega, en circunscripciones donde Forza Italia había desistido a favor de su partido. Al cambiar Bossi abruptamente de bando, Berlusconi tenía motivos para sentirse traicionado y para exigir nuevas elecciones que determinaran dónde se situaba la voluntad democrática. La disolución de la Cámara era prerrogativa del presidente, cuyo papel constitucional se suponía que estaba *supra partes*. Scalfaro, sin embargo, temiendo que Berlusconi volvería a su cargo si se permitía que los electores expresaran sus preferencias demasiado pronto, orquestó la formación de un Gobierno presidido por el banquero Lamberto Dini. Su más que bien predispuesto colaborador D'Alema, en plena sintonía con los hábitos inveterados de la Primera República y en completo contraste con los criterios de la Segunda, organizó el apoyo del centro-izquierda al Gobierno, a fin de ganar tiempo y preparar las condiciones para un resultado más favorable en una próxima ocasión. El partido tru-

culentemente xenófobo de Bossi era en realidad, explicaba el líder del PDS, una «costilla de la izquierda». Llegado el momento Dini mismo –otro que había abandonado a Berlusconi– fue transmutado en pilar de la coalición de centro-izquierda.

En este desenlace paradójico de la primera prueba a la que se vio sometido el nuevo orden radica la clave para descifrar el código genético de la cultura política italiana. Hay un concepto fundamental de la misma que no tiene equivalente en otras lenguas europeas: *spregiudicato*. Literalmente, sólo significa «sin prejuicios» –un término loable en Italia, como en todas partes. Eso significaba originalmente en el siglo XVIII, cuando gozaba de una connotación ilustrada que todavía mantiene. La primera entrada de esta voz en los diccionarios italianos la define como «independencia de espíritu, ausencia de parcialidad o de concepciones previas». A lo largo del siglo XIX, sin embargo, la palabra adquirió un segundo significado, que los mismos diccionarios definen como «falta de escrúpulos, ausencia de límite, descaró». Hoy en día –he ahí el punto clave– ambos significados se han fusionado. Para los demás europeos, los «sin prejuicios» y los «sin escrúpulos» son opuestos morales. Pero para los italianos *spregiudicatezza* significa, indivisiblemente, tanto admirable apertura mental como una deplorable disposición a mostrarse implacable. En teoría, según el contexto inferimos cuál de ambos significados es aplicable. En la práctica, sin embargo, el uso común erosiona la distinción entre ambos. La connotación de *spregiudicato* es hoy generalmente positiva, incluso cuando el referente es el segundo y no el primero. Con la fuerza tácita del uso cotidiano, la palabra se convierte en algo así como: «¿es que no son los escrúpulos meros prejuicios?». Una alusión al tema la encontramos ya en la literatura libertina de la Francia anterior a la Revolución, cuando se describía a los personajes como *sans préjugés*, en el sentido de que carecían de inhibiciones en el terreno sexual. En la Italia contemporánea, sin embargo, la elisión es sistemática y su uso principal se sitúa en el ámbito del poder.

Así entendida, la *spregiudicatezza* parece ser el denominador común de la más variada gama de figuras y fuerzas de la escena italiana. No elimina las diferencias políticas entre ellas, como si fueran iguales en cinismo, sino que les da un baño general, una especie de filtro que convierte los contrastes en technicolor que se generan en la batalla moral, tal y como son percibidos en el resto del mundo, en un espectro de centelleantes tonos grises, en superficies tornasoladas que cambian continuamente de tonalidad según el ángulo desde el que las observamos. Los ejemplos se multiplicarían: el eminente teórico de la democracia, universalmente respetado como personificación de los principios éticos, que no tiene nada que objetar a los tanques que bombardean el Parlamento ruso; el incorruptible ex juez, flagelo de la subversión, que ofrece palabras amables a los jóvenes cachorros nostálgicos de la República de Salò, cuando su partido tiene necesidad de ellos; el político en alza que declara a Mussolini el mayor estadista del siglo XX y que, poco después, es ensalzado como guardián de la Constitución por un veterano de la Resistencia; el intrépido fiscal, enemigo jurado del soborno y la corrupción, que obtiene una limusina y préstamos sin interés de sus amigos empresarios. La existencia de estos dobles raseros no significa que los raseros sean siempre los mismos; los contrastes políticos e ideológicos son tan reales y tan robustos como en cualquier otro lugar. Por otra parte, este pragmatismo ubicuo tampoco impide que se produzcan estallidos genuinos de moralismo. Ninguna cultura nacional es enteramente coherente, sería un error restar importancia a la intensidad de la indignación cívica por la *Tangentopoli*, verdadero telón de fondo todos estos años, y tildarla de poco sincera. Pero al lado del disgusto popular por la venalidad de los políticos, y subyacente a ella como actitud pasiva, está la tradicional falta de prejuicios de la mayoría de italianos: ¿qué mejor exponente de ella que la indiferencia de los votantes ante la flagrante reputación asociada a Berlusconi ya desde un principio?

El Gobierno Dini continuó dando pruebas elocuentes de la misma sensibilidad. La mayoría de sus miembros fueron cuidadosamente seleccionados por Scalfaro, cuyo papel presidencial en la crisis fue jaleado desde la izquierda como gran ejemplo de responsabilidad y probidad a favor de la Segunda República. De hecho, Scalfaro era un cristianodemócrata no precisamente atípico del viejo orden, que había figurado en algunos de los Gobiernos más denostados por quienes abogaban por el cambio de sistema. Untuoso en su manera de expresarse, y con el perfil de un corpulento polichinela, era famoso por haberse levantado en una ocasión de la silla que ocupaba en un restaurante para abofetear a una desconocida cuyo vestido le pareció descocado en exceso. Sin embargo, fue durante cuatro años ministro del Interior en el Gobierno de Craxi. En ese Ministerio, en medio de la cascada de escándalos que saltaron a raíz de la *Tangentopolis*, funcionarios del Sisde —el servicio secreto italiano equivalente al MI5 ①— declararon en 1993 que habían estado pasando un sobre mensual con 100 millones de liras, sin preguntas, a los sucesivos jefes del Ministerio. Salieron a relucir los nombres de cuatro ministros. Los fiscales romanos abrieron sendas investigaciones contra dos de ellos, que estaban ya políticamente fuera de juego, y dejaron libre de cargos a un tercero que resultó ser el titular en ese momento.

El cuarto era Scalfaro, por entonces presidente. Los fiscales no sólo rechazaron la idea de considerar los indicios que había contra él, sino que incluso imputaron a los testigos —según la memorable formulación del fiscal jefe Vittorio Mele—, por «subversión» en su testimonio, «independientemente de que lo que dijeran fuera o no verdadero». Desde la izquierda, nadie se inmutó. Una comisión de investigación formada para aclarar todo el asunto, presidida por un juez siciliano, declaró llegado el momento a Scalfaro libre de toda culpa. Cuando se formó el Gobierno Dini, ese mismo juez —Filippo Mancuso— fue premiado con el Ministerio de Justicia. Pronto surgieron fricciones, sin embargo, por el trato que daba a los magistrados de Milán, juzgado vejatorio. De manera que Scalfaro se vio cuestionado por su modo de proceder y el centro-izquierda promovió un voto de confianza en su contra en el Parlamento. Cuando la moción llegó al Senado —el debate era televisado— un Mancuso de acento grave subió a la tribuna y declaró, ante una nación estupefacta, que había sido presionado para alterar su informe sobre el caso de los fondos reservados del Sisde a instancias de Scalfaro, que actuó a través de su familiar de palacio Gifuni. Se produjo un gran alboroto. El centro-izquierda, indignado ante las revelaciones, provocó la caída de Mancuso, que dejó el cargo y fue al ostracismo. Un presidente que había salvado a la nación de un peligroso calvario en las urnas estaba por encima de toda sospecha. Sólo los prejuiciosos podían asociarle con la malversación.

A corto plazo, todas esas acrobacias no estuvieron mal calculadas. Las tácticas dilatorias de Scalfaro habían dado un respiro al centro-izquierda, cosa que aprovechó D'Alma. Cuando llegaron las elecciones de la primavera de 1996, el PDS había encontrado ya un candidato creíble para enfrentarse a Berlusconi en la persona de Romano Prodi —un economista de trasfondo católico, ampliamente respetado por su gestión al frente del holding estatal IRI— y había sentado las bases de una gran coalición bautizada con la robusta imagen de El Olivo. Por su parte, Berlusconi había sido incapaz de recomponer su alianza con la Lega, que acudió sola a las elecciones. El recuento de votos mostró un aumento real del apoyo al centro-derecha, pero dado que ahora estaba dividido, a diferencia del centro-izquierda, el resultado fue una precaria mayoría parlamentaria para el Gobierno de El Olivo. Prodi pasó a ser presidente del gobierno, con un vicepresidente del PDS. La promesa de la coalición ganadora era llevar a cabo una modernización coherente de la vida pública italiana, eliminar las anomalías nacionales y hacer que el país alcanzase plenamente los estándares occidentales. Sin duda, había llegado la hora de la Segunda República.

① Servicio de Inteligencia británico, como el CESID, ahora CNI, español. (N. de la T.)

Los ganadores tenían por delante una compleja agenda. El colapso de la Primera República se había precipitado por la corrupción y la criminalidad. Pero más allá de esas patologías crónicas, otro orden de presiones, y dos de ellas en particular, habían ejercido un papel decisivo. La primera era el Tratado de Maastricht, suscrito en 1992, que establecía los «criterios de convergencia» para entrar en la Unión Monetaria. Se requería una reducción drástica de la deuda pública italiana y del déficit presupuestario, que durante años había estado muy por encima del de las otras grandes economías europeas. En el extranjero se dudaba ampliamente de que Italia pudiera apretarse el cinturón de tal manera. La segunda urgencia provenía del regionalismo del norte. La revuelta de la Lega amenazaba con minar la unidad del Estado, si no se optaba por una solución federal. Además de estas fuerzas de cambio de carácter supranacional e interno, estaba todavía la tarea que la propia crisis nacional de 1992-1993 había dejado inacabada. A mediados de la década ya se había conseguido cortar de raíz la escalada militar de la mafia siciliana, y se habían sofocado los excesos de la corrupción política. Pero no se había establecido un orden legal estable: la justicia era todavía una palabra, no un sistema. Hacía tiempo que se venían denunciando deficiencias en la fiscalidad, la administración y el sistema educativo. Y finalmente, aunque no por ello menos grave, el nuevo sistema electoral había demostrado ser insatisfactorio para casi todos: en vez de reducir el número de partidos representados en el Parlamento, que era lo que se pretendía, lo había multiplicado. Si lo que se quería era reforzar el Ejecutivo, decían muchos, había que cambiar la Constitución.

Prodi no dudó acerca de cuál era su prioridad en este bosque de tareas pendientes. Por formación y temperamento, sus principales preocupaciones eran las económicas. Como presidente del gobierno su gran objetivo era asegurar el cumplimiento, por parte de Italia, de los criterios de Maastricht para ingresar en la moneda única en 1998. La normalidad, según este modo de ver las cosas, equivalía a la plena integración –sin ninguna de las maniobras subrepticias y fraudes del pasado– en una economía europea liberalizada. Ello significaba una férrea disciplina presupuestaria para controlar la inflación, reducir el déficit y moderar el volumen de la deuda pública. En pocas palabras, un cuadro macroeconómico ortodoxo, mitigado allá donde fuera posible –Prodi se comprometió a ello– por las preocupaciones sociales tradicionales.

El centro-izquierda fue consistente y efectivo en la consecución de su objetivo. Pese al estupear de los banqueros alemanes, los criterios de Maastricht se cumplieron según lo programado: Italia entró en la Unión Monetaria, y se ha beneficiado de los tipos de interés más bajos conocidos en el pago de su deuda pública. Este arduo esfuerzo no se vio acompañado, como debería, por una reforma fiscal –Italia sigue siendo un país en el que el Estado extrae proporcionalmente más de los trabajadores que de los restauradores o abogados–, pero sí al menos por una recaudación más efectiva y hasta cierto punto más equitativa que en el pasado. El coste de la convergencia fue alto: significó el crecimiento más bajo experimentado por cualquier gran sociedad industrial en los años noventa, y virtualmente no redujo en nada los grandes niveles de paro juvenil y de algunas regiones especialmente castigadas –más del veinte por ciento en el sur. Aun así, el acceso a la Unión Monetaria Europea fue sin duda el mayor logro de la experiencia de El Olivo, aunque supuso también la continuación más obvia de las directivas del pasado. Maastricht fue firmado, y en parte también redactado, por Andreotti, y el más drástico esfuerzo fiscal para cumplir el Tratado fue obra de Giuliano Amato, un lugarteniente de Craxi en los últimos días de la Primera República. En este sentido Prodi actuó como ejecutor competente de un legado que los democristianos y el PSI le habían transmitido, algo en lo que las élites industriales y financieras habían estado de acuerdo desde siempre.

La integración monetaria no fue, sin embargo, el punto más importante de la modernización prometida por el eslogan de la Segunda República. Era la reforma constitucional, electoral y administrativa lo que daría a Italia el tipo de gobierno honesto y eficiente del que gozaban sus vecinos. Aquí no fue Prodi, sino D'Alema y el PDS, quienes estuvieron en la vanguardia desde el principio. A comienzos de 1997 D'Alema hizo aprobar la creación de una comisión mixta de diputados y senadores para revisar la Constitución, de la que él mismo sería presidente. Comoquiera que la reforma constitucional requería una mayoría de dos tercios en el Parlamento, y se necesitaría algún tipo de acuerdo con la oposición, el efecto de la *Bicamerale* era otorgarle un foro público en el que hacer tratos con Berlusconi y Fini, a expensas, inevitablemente, de Prodi, jefe del Gobierno. En esa comisión, D'Alema, que pretendía arrastrarlos a un pacto que marginaría a los pequeños partidos del sistema político, bajo un Ejecutivo fuerte –si fuera necesario, semi-presidencialista–, se apartó de la trayectoria seguida hasta entonces, expresando su respeto por ambos líderes, objeto anteriormente de las más feroces injurias de la izquierda. Muy pronto se lanzaron los tres a un intercambio de cumplidos mutuos, como futuros compañeros en la tarea de llevar la responsabilidad y la claridad al Gobierno de Italia. El efecto fue conferir una dosis elevada y sin precedentes de legitimación política a Berlusconi.

Berlusconi ya estaba condenado por juzgados de primera instancia. Los magistrados de Milán ampliaban el rastreo en el laberinto de empresas que poseía.

En ese momento, muchos militantes de base del PDS, por no hablar de otros que apoyaban al Gobierno de El Olivo, tuvieron que tragar saliva. Los cargos que ayudaron a descabalgarse tres años antes a Berlusconi habían sido, en comparación con lo habitual en *Tangentopolis*, de entidad relativamente menor: pagos a la Guardia di Finanza, una policía fiscal que no estaba por encima de sospechas de incurrir en prácticas de estafa. Para entonces Berlusconi ya estaba condenado por juzgados de primera instancia por esta razón y también por falsificar las cuentas de su compañía, y los magistrados de Milán ampliaban el rastreo en el del laberinto de empresas que poseía. Para un lego, sin embargo, todos esos juicios podían parecer más técnicos que otra cosa. Pero a principios de 1996, unos micrófonos instalados bajo los ceniceros de un bar llevaron a la detención de uno de los jueces más importantes de Roma, Renato Squillante –cuyo nombre significa gorjeante– y de dos colegas, bajo la acusación de haber dictado sentencias favorables, en un juicio por bancarrota de la familia Rovelli, que ascendía a la bonita suma de 678 billones de liras, a cambio de un soborno de más de 60 billones de liras.

El camino que llevó a ellos empezó con una belleza rubia, una anticuaria de Milán llamada Stefania Ariosto. Cuando se metió en política, Berlusconi se llevó consigo a dos de sus asesores legales más importantes, Vittorio Dotti y Cesare Previti –uno milanés y otro romano–, que se odiaban mutuamente. Stefania Ariosto había sido amante de Dotti, y posiblemente también de Previti. Al ser interrogada por el tribunal de Milán, explicó que había visto a Previti entregar grandes sumas en efectivo a Squillante en una fiesta que tuvo lugar a bordo de un yate que navegaba por el Tíber, y en otras ocasiones. En efecto, los bancos suizos detectaron transferencias regulares entre Previti y dos colegas más y los jueces romanos, que ascendían exactamente al precio del soborno por el que estaban siendo imputados. Investigaciones posteriores revelaron que el propio Berlusconi había pagado casi medio millón de dólares a Squillante, a través de Previti, por una sentencia favorable en la batalla por la adquisición del conglomerado de alimentación y catering SME. La naturaleza de esas imputaciones –compra sistemática de altos jueces en la mismísima capital– excedía en gravedad a cualquiera de los muchos escándalos que acabaron con la Primera República, la mayoría relacionados con la corrupción en el Ejecutivo, y no en el núcleo del poder judicial.

Tal era el entramado que los italianos, leyendo en los periódicos los cordiales debates de la *Bicamerale*, estaban invitados a olvidar. Berlusconi pretendía que se pusiera freno a los jueces a

cambio del pacto constitucional, cosa que D'Alema se mostró dispuesto a considerar. Pero las complicadas maniobras del PDS en la *Bicamerale* finalmente fracasaron ante la hostilidad de la Lega –que se temió que sería apartada del pacto– y los cálculos de los más perspicaces asesores de Berlusconi, satisfechos con el grado de absolución que ya habían conseguido para éste y muy reacios a dejar que D'Alema se pusiera los laureles como arquitecto de la nueva Constitución. En el verano de 1998, después de muchos borradores intercambiados de acá para allá, la oposición anunció abruptamente que no había pacto.

Fue un serio traspies para el PDS del que, no obstante, D'Alema se recuperó unos meses más tarde. Desde el principio, el Gobierno había dependido del apoyo en el Parlamento de una fuerza que no pertenecía a la coalición, la fracción del PCI que había rechazado los términos de la mutación de éste en 1989 y que, con el nombre de Rifondazione Comunista, se había afianzado como partido a la izquierda del PDS. Aquel otoño, ante el hecho de que los presupuestos que había preparado Prodi hacían tan pocas concesiones que se presentaba muy difícil que Rifondazione Comunista se mantuviese en línea, D'Alema vio la oportunidad de hacerlo caer. Lo hizo con guante de seda, dando informales esperanzas a Rifondazione de un Gobierno más de izquierdas (que él mismo presidiría), mientras se demoraba en América del sur, manteniéndose lejos de la escena, y fallando por casualidad en asegurar que todos y cada uno de los diputados de la coalición estuvieran presentes para la moción de confianza, cuando regresó. Prodi cayó por un voto en la Cámara, y no se sorprendió. D'Alema había demostrado ser un maestro en las tácticas que Stendhal consideró acertadamente una peculiaridad italiana: el arte de la política como ejercicio consumado de voluntad subjetiva y de inteligencia, sin un sentido de Estado como estructura objetiva de poder y de obligaciones –efecto de la larga ausencia de unidad nacional. Esta es la combinación que formula ya Maquiavelo, cuyo reverso sería la cultura imperial española, que cortó sus sueños de raíz. Tras un púdico intervalo de días, la identidad del nuevo primer ministro no fue ninguna sorpresa.

La elegante operación tuvo su coste. Cuando el resentimiento de Prodi amenazaba con ser peligroso, fue rápidamente neutralizado exportándolo a Bruselas como presidente de la Comisión Europea, donde muy pronto resurgió de sus cenizas. Pero el espectáculo de intrigas y divisiones que se había ofrecido públicamente, que recordada demasiado plásticamente los hábitos de la Primera República, dañó seriamente la credibilidad de El Olivo como fuerza renovadora. Para el PDS, en cambio, el golpe de efecto parlamentario era un paso necesario hacia la normalidad italiana, en un sentido a su modo de ver más importante. Los herederos del PCI eran la pieza central de la coalición gobernante –de hecho, eran el único partido con entidad propia en su seno– y se les señalaba abiertamente como «principales accionistas» del Gobierno. Sólo un prejuicio anacrónico impedía que se convirtiesen de poder efectivo en poder simbólico, como habría sucedido en cualquier otro país europeo, según decían. D'Alema decidió romper ese tabú y se instaló en el Palazzo Chigi.

¿Qué frutos dio que el centro-izquierda redujera la distancia entre el *pays réel* y el *pays légal*? La prioridad del PDS había sido por mucho tiempo cambiar el sistema electoral. La tan traída y llevada reforma constitucional era un medio para ello más que un fin en sí misma; una moneda de cambio en las negociaciones con la derecha, que inicialmente había querido un sistema presidencialista fuerte. Pero los antiguos comunistas no eran los únicos que creían que una reforma electoral drástica –que aboliera el odiado «Mattarellum», el híbrido sistema fraguado en medio de la crisis cinco años antes– fuese la clave de una Segunda República estable. Prácticamente toda la prensa clamaba por lo mismo, mientras Segni y Pannella –los promotores del original referéndum que abolió la representación proporcional– agitaban a favor de un segundo referéndum para concluir la obra ini-

ciada. Los partidos interesados abogaban por diferentes modelos extranjeros, la mayoría de inspiración angloamericana. La intervención más lúcida y mordaz en estos debates fue, de lejos, la de Giovanni Sartori. La mayor autoridad mundial en sistemas electorales comparados, catedrático de la Universidad de Columbia y articulista en el *Corriere della Sera*, defendió abiertamente en una serie de artículos ingeniosos y polémicos el modelo francés de elección presidencial directa y de votación mayoritaria a doble vuelta.

Al PDS no le convencía el presidencialismo francés, porque temía que la personalización del poder daría ventaja a Berlusconi o a Fini, pero sí que era partidario resuelto del *double tour*. De hecho, ésa había sido su prioridad estratégica absoluta desde el principio. La razón estuvo siempre clara: bajo las normas existentes, el partido tenía su techo electoral en el veinte por ciento del electorado —el mayor partido en el mosaico del centro-izquierda, pero pequeño para los estándares europeos. Ya que no podía avanzar más en la competición electoral directa, necesitaba una restricción en el abanico de opciones a disposición del votante para eliminar a sus rivales en la izquierda y, potencialmente, también en la derecha. El PDS quería, sobre todo, despejar el terreno de cualquier posible desafío por parte de Rifondazione, fuerza capaz de atraer votantes descontentos de sus propias filas, y de ejercer una indeseable presión desde fuera sobre el Gobierno de centro-izquierda. Este era un objetivo, sin embargo, que no podía ser explicitado. Sartori, más cándida y coherentemente, argüía que el *double tour* era fundamental para barrer a la Lega y a Rifondazione, que representaban sendas amenazas a un orden estable y no ideológico en donde todas la políticas convergerían en un centro liberal.

D'Alema y su partido invirtieron mucha energía en intentar forzar ese cambio por todos los medios, con la esperanza de que a Berlusconi también le parecería adecuado a sus intereses. Sin embargo, y pese a estar tentado durante un tiempo por la idea, Berlusconi pronto se dio cuenta de que la vía más rápida y segura para regresar al poder era renovar su alianza con Bossi, quien se mostraba implacablemente hostil a la idea del *double tour*. El resultado final de cinco años de incesantes y cada vez más desesperados esfuerzos del PDS para modificar las reglas del juego político fue una especie de farsa. Tras las insistentes demandas de doble vuelta de inspiración francesa, cuando D'Alema cayó en la primavera de 2000, a sólo un año de las elecciones, el PDS de repente apoyó el referéndum Segni-Plannella para acabar de implantar el sistema de votación por mayoría relativa de inspiración británica (que siempre había rechazado hasta entonces) y cuando éste fracasó pasó a defender en vano un sistema plenamente proporcional de tipo alemán (que había sido anatema para él durante una década) simplemente para atemperar la derrota que veía venir en las inminentes elecciones. Es difícil imaginar un peregrinaje más fútil e ignominioso, exhibición de oportunismo sin otro norte que el interés propio. En cuanto a la reforma constitucional, todo quedó igual.

Mucho más apremiante era, en realidad, la necesaria reforma de la justicia italiana, una mezcla de códigos legales procedentes de la época fascista, poderes de emergencia arbitrarios, procedimientos caóticos y condiciones carcelarias no menos caóticas. Ahí es donde durante largo tiempo ha habido, en efecto, un panorama sin par en ningún otro país de la Europa occidental. En Italia no existe *habeas corpus*: cualquiera puede ser retenido en prisión, aunque sea sin cargos, por más de tres años, por el sistema de *custodia cautelare* —prisión preventiva—, situación en la que se encuentra la mitad de los reclusos del país. A los testigos, no sólo se les garantiza inmunidad de ser perseguidos bajo las normas del «arrepentimiento» o *pentitismo*, sino que pueden recibir dinero del Estado por un testimonio apropiado sin tener siquiera que comparecer en juicio, y sin que figure en ninguna parte públicamente lo que han recibido por su testimonio —que procede quizá de los sobres de fondos reser-

vados que, según los agentes del Sisde, se embolsaban cada mes Scalfaro y sus iguales. Dentro de la magistratura, no hay separación de carreras, y muy poca de funciones, entre fiscales y jueces. En el lenguaje popular italiano, a diferencia del francés o el español, los que presentan acusaciones son identificados sin más con quienes se supone que deben sopesar la fuerza de las pruebas: a todos se les llama simplemente *giudici*. Unos cincuenta mil internos se hacían en prisiones construidas para la mitad de esa población. El sistema procesal tiene tres instancias, el promedio de duración de un juicio son diez años, y el número de procesos que tienen desbordados a los juzgados es, hoy por hoy, de unos tres millones. En medio de esta jungla, sólo la ineficacia guarda parangón con la brutalidad, en parte mitigándola, en parte provocándola.

Así era el sistema que se movilizó de improviso, por iniciativa de unos magistrados en cruzada, contra la corrupción política en el norte y contra la mafia en el sur. El coraje personal y la energía con que los jueces de Milán y Palermo se lanzaron contra esos demonios no tenía precedente en la historia reciente de la administración italiana. En Sicilia, los investigadores arriesgaban su vida a diario, pero ellos también eran fruto de una cultura que descuidaba los escrúpulos. La prisión preventiva era usada deliberadamente como instrumento de intimidación. Se filtraban ilegalmente notificaciones de investigación para acobardar a los cargos públicos señalados por ella. Se reunían pruebas amañadas sin ningún tipo de consideración: en el caso de Andreotti, uno de los testigos de cargo del ministerio público era un matón que cometió otro asesinato mientras estaba en nómina de las autoridades por su declaración, para vergüenza de éstas. Cualquier propuesta de separación de la carrera de juez y la de fiscal era atacada ferozmente. La justificación que se daba de tales prácticas era siempre la misma: Italia estaba en estado de emergencia y la justicia no podía permitirse remilgos en materia de derechos individuales. Por supuesto, aquello no era sólo la respuesta a una situación de emergencia, sino que la perpetuaba. El gran descontento con la situación de la justicia no puede solucionarse infringiendo sus principios. «Vamos a darle la vuelta a Italia como a un calcetín», declaró Piercamillo Davigo, la mente más clara de los magistrados de Milán, como si el país fuera una pieza más del cesto de la ropa sucia.

Cuando el prestigio de Mani Pulite estaba en su apogeo, en la primera mitad de los años noventa, momento en el que su fiscal estrella Antonio Di Pietro alcanzaba los máximos índices de popularidad según todos los medios de comunicación, fueron pocas las dudas que se formularon sobre el trabajo de los magistrados desde la izquierda. Por su parte, D'Alema no cayó nunca en este tipo de aclamación acrítica. Pero también en este caso los cálculos tácticos a corto plazo prevalecieron sobre cualquier conjunto coherente de principios. Consciente de la popularidad de los magistrados, el PDS intentó sobre todo capitalizar sus triunfos. D'Alema llegó a reclutar a Di Pietro ofreciéndole un puesto seguro de senador en las listas del PDS en 1997, precisamente en un momento en que afianzaba la credibilidad de Berlusconi como líder nacional a pesar de las imputaciones legales que había contra él. Fueran cuales fueran las reservas que manifestasen en privado los dirigentes del PDS, no se formuló ninguna crítica pública de los peores defectos de la justicia italiana: la prisión preventiva, los testigos mercenarios, la confusión de jueces y fiscales. Quedaba así el campo libre a la posibilidad de que la derecha ofreciera alternativas más defendibles, con un cinismo que sólo les desacreditaba. Así las cosas, ningún cambio estructural de importancia podía tener lugar. Al final de los cinco años de Gobierno de El Olivo, los magistrados se habían superado a sí mismos persiguiendo a Andreotti con un surtido de extrañas y góticas acusaciones de las que fue absuelto, y habían fracasado en reunir pruebas convincentes con las que respaldar las imputaciones, mucho más plausibles, contra Berlusconi. Mientras tanto Ita-

lia asistía al trágico espectáculo de ver al jefe de los magistrados de Milán aplaudir el encarcelamiento de Adriano Sofri, en base al testimonio de un arrepentido que la izquierda que defendía a Sofri nunca consiguió que fuese desautorizado. La situación de las cárceles seguía siendo tan desastrosa como siempre.

En otros campos la ejecutoria del centro-izquierda fue más respetable, aunque en ningún caso muy llamativa. Las regulaciones administrativas se simplificaron –cosa que no es una bagatela para el ciudadano en un país con más de cincuenta mil leyes, cuando en Alemania no pasan de cinco mil–, y se transfirieron recursos fiscales a las regiones. Se reformó parcialmente un sistema universitario en el que tradicionalmente tres cuartas partes de los estudiantes nunca terminan la carrera; pero sin más financiación es improbable que se produzca un progreso sustancial. Por otra parte, la posibilidad de mejorar la calidad de los medios de comunicación italianos desapareció cuando, persiguiendo un pacto con los jefes de Mediaset en la *Bicamerale*, el PDS optó por rechazar la imposición de límites temporales a la concesión televisiva de Berlusconi establecida independientemente por el Tribunal Constitucional. Por lo que respecta a la política exterior, D'Alema convirtió el país en lanzadera del bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia, yendo más allá de lo que la Democracia Cristiana había ido nunca a la hora de plegarse a la voluntad de los Estados Unidos. En general, el centro-izquierda se mostró menos independiente de Washington –en el Oriente Próximo lo mismo que en los Balcanes– que los regímenes de Andreotti o Craxi.

Italia tiene más de cincuenta mil leyes, cuando en Alemania no pasan de cinco mil.

Se calculaba que nada de ello podía inspirar un excesivo entusiasmo a los votantes de El Olivo, y mucho menos a los que no lo habían votado. En la primavera de 2000 las elecciones regionales supusieron una amarga derrota del centro-izquierda. Con las generales a un año vista, D'Alema se bajó del tren para eludir responsabilidades en el inevitable fiasco. El político italiano más astuto de su generación declaró una vez lacónicamente después de conocer a Blair: «manca di spessore» («un poco superficial»). Vio la paja en el ojo ajeno –la sonrisa tontorrón de disc-jockey– pero no la viga en el propio: su cultura era sin duda bastante más sólida, pero eso no era suficiente. Exceso de astucia táctica y falta de reflexión en el terreno de las ideas: el resultado final fue la reducción autodestructiva a los clichés neoliberales habituales incluso de los precarios residuos de la «socialdemocracia europea» a la que nominalmente aspiraba el PDS. Al partido le hubiera ido mejor si hubiera continuado leal a Prodi, respetado por el público, y si hubiera aceptado las reglas por las que fue elegido. Los votantes habían visto en El Olivo un Gobierno estable, pero las ambiciones de D'Alema destruyeron esa imagen. Tal como iban las cosas, el centro-izquierda cerró el círculo cuando su último presidente de gobierno fue un antiguo consejero de Craxi, Giuliano Amato, volviendo por así decir al principio de la década. Es comprensible que no les preocupara presentarlo como candidato para batirse con el centro-derecha al año siguiente.

En estas condiciones, la victoria de Berlusconi en mayo de 2001 –con Bossi asegurando el flanco norte una vez más y con Fini en el sur– estaba cantada. El trasvase real de votos, tal y como había sucedido en la anterior elección, fue pequeño. El centro-derecha, que ya había tenido mayoría en 1996, la convirtió esta vez en un terremoto parlamentario. Berlusconi mantuvo sus posiciones entre las amas de casa, los católicos conservadores, los pequeños empresarios, la tercera edad y los treintañeros. Pero esta vez, rebautizada su formación como «La Casa de las Libertades», consiguió más votos del segmento de la clase trabajadora, incluyendo la del sector privado, que el centro-izquierda. La clave de la magnitud de su victoria radicaba en el veredicto culpable que el electorado falló sobre la ejecutoria del centro-izquierda en el poder –muchos de los que efectivamente votaron a El Olivo reconocían que tenían más fe en la capacidad del centro-derecha para

resolver los numerosos problemas a los que se enfrentaba el país. En los dos epicentros de la crisis de la Primera República, Lombardía y Sicilia, Berlusconi obtuvo los resultados más arrolladores.

Visto en perspectiva, el centro-izquierda se enfrenta ahora a la factura de sus maniobras para abortar la presidencia de Berlusconi en 1994. Entonces su mayoría parlamentaria era mucho menor, su experiencia política más limitada, su imperio financiero más débil y su legitimación más frágil. Pensando en ganar tiempo para sí apartándole del poder, el centro-izquierda le permitió reforzarse y prepararse mejor para ejercerlo. Ahora la posición de Berlusconi es mucho más fuerte: Forza Italia ya no es una tapadera, sino un partido efectivo capaz de representar un papel en cierto modo análogo a la vieja Democracia Cristiana; Fininvest se ha recuperado de sus dificultades; sus aliados no pueden plantearle desafíos a corto plazo, y sus propios oponentes le han concedido el estatus de líder nacional. En estas condiciones, algunas voces proclaman que la democracia corre peligro en Italia si Berlusconi y sus indeseables asociados consiguen consolidar su control sobre el país. ¿Puede ser que Italia se enfrente a una perspectiva de creciente autoritarismo, organizado nuevamente en torno al culto a un líder carismático, pero basado esta vez en un control sin precedentes de los medios de comunicación —ahora también la televisión pública, además de la privada— y no en las escuadras de choque y el aceite de ricino?

Dos realidades estructurales desmienten esa idea. En primer lugar, el fascismo llegó al poder como respuesta a una amenaza desde abajo: al peligro de que la revolución que Gramsci había exaltado en Rusia se extendiese a Italia. Hoy en día ese fermento no existe en las profundidades de la sociedad. La clase trabajadora está atomizada, no hay consejos de fábrica, el PCI se ha desvanecido, los impulsos radicales entre los estudiantes y los jóvenes han decaído. El capitalismo nunca ha estado más a salvo en Italia, como en cualquier otro sitio. Históricamente, la segunda condición favorable al éxito del fascismo fue la autoafirmación nacionalista, la promesa de un Estado expansionista capaz de atacar a los vecinos y conseguir territorios por la fuerza militar. También eso se ha acabado. Los días del Estado autárquico han pasado. Italia está estrechamente ligada a la Unión Europea y su economía, fuerzas armadas y diplomacia están sometidas a controles supranacionales que dejan muy poco margen a políticas independientes de la índole que sea. El marco ideológico y jurídico de la UE excluye cualquier ruptura con el régimen liberal-demócrata consagrado. No existe la necesidad ni la posibilidad de que Berlusconi se convierta en una versión actualizada de Mussolini.

Pero es que además, desde el punto de vista de los programas, no era mucho lo que separaba al centro-derecha del centro-izquierda en las elecciones del año pasado. La agenda habitual de los Gobiernos del mundo atlántico —privatización de lo que queda de empresas públicas, desregulación del mercado laboral, recorte de pensiones, bajada de impuestos— formaba parte del repertorio de ambos. Falta por ver lo lejos que llegará en todo ello La Casa de las Libertades. La enseñanza y la sanidad privadas tendrán un campo de acción más amplio. Berlusconi ha prometido medidas más duras contra los inmigrantes, cuya suerte —éste es el único terreno en el que una derecha feroz tiene espacio en Europa— sin duda empeorará. Pero por lo que se refiere a la orientación socioeconómica en general, el régimen de Berlusconi, lejos de ofrecernos reacciones radicales, es ya sospechoso de ser demasiado moderado —es decir, no lo suficientemente sometido al mercado— en opinión de la prensa económica, que ve con recelo su promesa de lanzar un gran programa de obras públicas y de inversiones que crearían un millón y medio de puestos de trabajo. En la UE, el nuevo Gobierno ha sido menos complaciente con la opinión del *establishment* que su predecesor, lo cual ha provocado más de un ceño fruncido en Bruselas y los lamentos de la oposición desde Roma, que le acusa de poner en juego la reputación de Italia en el exterior. Pero su autoafirmación ha sido de momento

sólo un gesto, que prácticamente no ha pasado de provocar el cese del gris funcionario de la Organización Mundial del Comercio que le fue impuesto en un primer momento como ministro de Asuntos Exteriores y de batallar por la localización de la sede de la agencia de seguridad alimentaria de la UE. En todo lo que son asuntos de importancia real, es poco probable que haya ningún alejamiento serio del euroconformismo reinante hoy en día.

Todo ello sugiere que el resultado del Gobierno Berlusconi será tan poco excepcional como el de su más cercano aliado europeo, el centro-derecha español. El partido de Aznar es, después de todo, el descendiente directo de un régimen fascista que duró el doble que el italiano, y mató a mucha más gente; aun así es hoy en día un modelo de corrección política y, de hecho, el interlocutor favorito de los emisarios londinenses de la tercera vía. ¿Qué podría evitar que Forza Italia emule al Partido Popular y se convierta en un miembro más, e igualmente respetable, del comité de partidos democráticos? Nada, a lo que parece. Pero hay un pequeño inconveniente. Desde su llegada al poder, Berlusconi ha perseguido con verdadera energía sólo uno de sus objetivos: cambiar las leyes que todavía pueden llevarle ante los tribunales. La rapidez y determinación con que su Gobierno ha actuado en ese campo —forzando medidas que hagan que las pruebas contra él halladas en Suiza sean nulas en Italia, e intentando sofocar el caso Ariosto a base de diferir el fallo hasta que llegue la prescripción— muestran hasta qué punto teme todavía recibir una estocada mortal de los magistrados. Amañar contabilidades y evadir impuestos puede que no esté demasiado mal visto en Italia. Ahora bien, una sentencia firme por corrupción de jueces a gran escala ya sería más difícil de pasar por alto. Tal como están las cosas en la justicia italiana hasta la fecha, pocos apostarían por ello, pero no se puede excluir una sorpresa.

Si se diera el caso, sin duda pondría a prueba todo lo que ha pasado con la cultura política del país en la última década. Ya hay figuras políticas destacadas de la oposición que han manifestado que quizá Berlusconi no tendría que dimitir necesariamente como primer ministro —«después de todo ha sido elegido democráticamente»— aunque fuera declarado culpable de sobornar a los jueces. Es posible, pero no seguro, que la opinión pública se rebele contra esa complacencia. La desmovilización ideológica por la que han abogado siempre los que propugnaban una Italia «normal» ha sido uno de los frutos de la experiencia del centro-izquierda: una cuarta parte del electorado, aproximadamente, se abstiene en las urnas. Claro que si tomamos a EEUU como modelo de normalidad, sólo debería votar el 50% —la prueba más fehaciente de satisfacción popular con la sociedad tal como es. Gramsci pensaba que Italia era el país de la «revolución pasiva». Puede que éste sea el rótulo adecuado para referirnos al nacimiento de la Segunda República. Su advenimiento no ha aportado una nueva Constitución, no ha racionalizado el sistema de partidos, no ha modernizado la justicia ni ha reorganizado la burocracia, tal y como defendían quienes habían hecho bandera de ella. Pero —podrían argumentar también, por su parte— la corrupción ha caído desde la cima intolerable que alcanzó en los años ochenta a los niveles más manejables de los cincuenta y sesenta; la mafia ha vuelto, después de su derrota en la guerra abierta, a formas de actuar más tradicionales y menos llamativas; el Parlamento al menos se divide ahora según las pautas convencionales, con el Gobierno a un lado y la oposición a otro; no hay desacuerdos insalvables entre las políticas que defienden los principales partidos; la vida pública está cada vez más exenta de pasión. ¿Acaso no es ésta precisamente la revolución pasiva que necesitamos?

Si la juzgamos según estos parámetros, la Primera República, por grande que fuese su descomposición en la fase final, aparece bajo una luz más favorable. En su época de apogeo había pluralismo real de opinión y de expresión política, una participación muy activa en organizaciones de masas y en la vida cívica, un intrincado sistema de negociaciones informales, una alta

Berlusconi ha perseguido sólo uno de sus objetivos: cambiar las leyes que pueden llevarle ante los tribunales.

cultura de gran solidez y la más impresionante serie de movimientos sociales que pudiera exhibir ningún otro país europeo en aquel periodo. El conflicto intelectual y la tensión moral generaron líderes de muy diferente talla. En ese y otros aspectos se ha producido una miniaturización. Italia necesita una administración honrada, servicios públicos decentes y un gobierno que rinda cuentas, por no hablar de trabajo para los parados, cosas que el viejo orden no pudo ofrecer. Pero para lograr todo eso, no era necesario destruir lo que sí que se había conseguido. La «normalidad» es poco más que el ideal de un conformismo provincial.

Sin embargo, incluso en la actualidad no han desaparecido todas las huellas de aquel pasado mejor. Los impulsos de rebelión ante los peores aspectos del nuevo orden persisten. En otoño de 1994, el movimiento sindical fue capaz de la mayor movilización de la historia de la postguerra en el país, e inundó las plazas de Roma con un millón de personas para impedir el primer intento de Berlusconi de reformar las pensiones. En mayo del pasado año, los vacuos rituales del G7 quedaron hechos añicos cuando multitudes de jóvenes protestaron por las calles de Génova. Sólo en Italia ha habido una marcha de unas 300.000 personas –de Perugia a Asís– contra la guerra de Afganistán. Si los comunistas franceses o los verdes alemanes se han convertido sin gran dificultad en simples hojas de parra o altavoces del *status quo*, Rifondazione ha resistido tanto a la cerrazón sectaria como a la absorción. De los tres periódicos europeos que tienen su origen en los movimientos radicales de 1968, *Libération* de París y el *Tageszeitung* de Berlín son parodias cansinas de lo que fue su objetivo original; sin embargo, *Il Manifesto*, junto con su revista mensual, se mantiene incólume. Puede decirse, por otra parte, que la más sobresaliente cinematografía política de la Europa contemporánea es la de Gianni Amelio. Además, y más allá de las objeciones que se les pueda poner, los dos análisis más influyentes de la globalización formulados desde la izquierda hasta la fecha proceden de Italia, vía América: *Imperio y Gobernabilidad* y *caos en el moderno sistema mundo*, obras respectivamente de Antonio Negri y de Giovanni Arrighi.

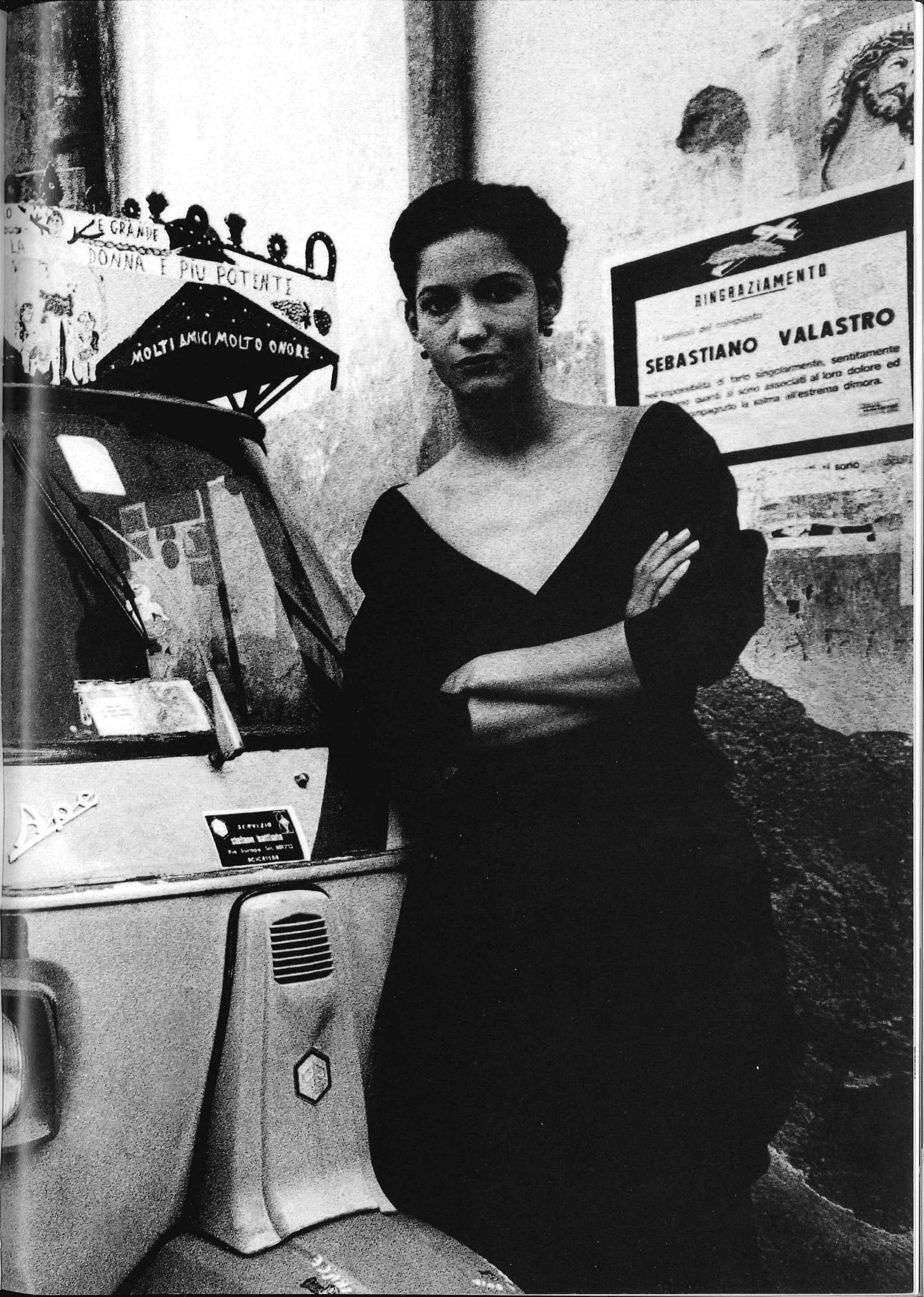
La esperanza de la Segunda República ha sido arrancar todo ello de raíz. Pero homogeneizar una sociedad a base de romper con su pasado conlleva siempre el riesgo de provocar una violencia inútil. ¿De dónde proviene, al fin y al cabo, la idea de la «normalización»? El término fue acuñado por Brezhnev cuando la invasión de Checoslovaquia por las fuerzas del Pacto de Varsovia, en 1968, cuyo objetivo era forzar a ese país a volver a las pautas del bloque soviético. Ya sabemos cómo acabó todo aquello. Los esfuerzos contemporáneos por normalizar Italia han tratado de reconfigurar el país a imagen y semejanza bien de EEUU, bien de la Europa que los imita. Las presiones que se ejercen por detrás en todo este proceso son incomparablemente mayores. Pero los resultados quizá no son exactamente los que pretendían quienes lo inspiraron. Porque, en lugar de quedarse atrás, ¿no podría ser que Italia estuviera encabezando la marcha hacia un futuro común? Después de todo, en el mundo de Enron y Elf, de Mandelson y Strauss-Kahn, de Hinduja y Gates, ¿qué podría ser finalmente más lógico que un Berlusconi? A lo mejor, como ha sucedido tantas veces, los viajeros en pos de la normalidad han llegado a su estación de destino sin ni siquiera notarlo.

■ Traducción de Maite Insa

Anuncio publicitario de
«Vacaciones en Roma», 1953

Imagen publicada en la Revista
«Volare», de Giannino Malossi,
1998





E GRANDE
DONNA E PIU POTENTI

MOLTI AMICI MOLTO ONORE

RINGRAZIAMENTO
SEBASTIANO VALASTRO
nell'impossibilita di farlo singolarmente, sentitamente
per questo si sono associati al loro dolore ed
impegnato la colpa all'estrema dimora.

Ape

SERVIZIO
Assistenza Clienti
Per favore tel. 80770
80081888

Museo Guggenheim, de Frank
Lloyd Wright, 1959

Jeff Koons
White terrier, 1991

